TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE CUNDINAMARCA

Sala Civil Familia

Bogotá D.C., diecinueve de mayo de dos mil veintitrés

Referencia 25286-31-10-001-2021-00218-01

Se decide el recurso de apelación formulado contra el auto de 18 de abril de 2023 que dictó el Juzgado de Familia de Funza, dentro del proceso de sucesión -y liquidación de sociedad conyugal- de Haydin Leonardo Bustos Navarrete.

ANTECEDENTES

1. El expediente informa, en lo que importa para decidir, que el extinto Bustos Navarrete contrajo matrimonio con Adriana Orduña Olaya el 15 de diciembre de 2017, nupcias que finalizaron el 4 de junio de 2020 porque aquél falleció en esa fecha.

Con posterioridad, la cónyuge sobreviviente diseñó inventarios adicionales en donde, entre otras cuestiones, anunció como pasivo de la sociedad conyugal \$50.000.000, cuya acreedora es Pilar Salamanca. Como recompensas discriminó: \$31.000.000 equivalentes a los pagos de intereses que pagó a aquella prestamista, *“pago de póliza de los vehículos Mercedes \$2.800.000, pago de pólizas de los vehículos Kia \$5.313.983, pagos gastos*

Mercedes \$4.284.679, mantenimientos camioneta Kia, pagos cuotas de administración Club Serrezuela \$10.049.758, pago de empleada de servicio y gastos de servicio \$2.319.554 y pago tarjeta Davivienda \$1.827.927”.

La Corporación Serrezuela Country Club pidió que se introduzcan las expensas que el extinto le adeuda, las cuales resultan en \$12.619. 894.

2. Los herederos del finado, objetaron la agregación de los prenombrados conceptos con fundamento en que el pasivo no se encuentra reflejado en los títulos valores que cumplan con los requisitos de la normatividad comercial, ya que los adosados no tienen fechas de suscripción o exigibilidad y porque no tienen carta de instrucciones y enfatizaron que las demás erogaciones son improcedentes porque la señora Orduña Olaya es la única que utiliza los rodantes y servicios reseñados.

3. El juez, a través del auto apelado, declaró probado la objeción orientada contra la deuda de \$50.000.000 atendiendo a que *“...a la audiencia compareció directamente la acreedora, aportando tres títulos valores, con espacios en blanco, sin diligenciar de lo cual no es posible establecer la fecha de los préstamos, ni tampoco aportó la carta de instrucciones, conforme los indica la norma, para efectos de su exigibilidad y por otra parte tampoco, si*

bien se indicó que era para gastos de mercado, compra de dron, lo cierto es que no quedó debidamente acreditada en que se vio beneficiada la sociedad conyugal que se liquida, con dichos dineros prestados por la cónyuge supérstite”.

Por concepto de recompensas solamente admitió \$5.921.959, ya que *“la sociedad está obligada a cubrir la carga que generan los bienes sociales, y que se causan después de disuelta la sociedad como: impuesto predial, de vehículos, soat, pago de administración, hipotecas, prendas, que son gastos de propios de los bienes sociales y deben debe cubierto en la medida que el mismo bien hace parte del activo que será objeto de reparto y claro que es su cubrimiento en vigencia de la sociedad se presume cubierto con dineros sociales, ya no ocurre lo mismo una vez disuelta y quien los pagó una vez disuelta tiene derecho a reclamar a que se le reconozca su pago”.*

Y entre otros pronunciamientos, no agregó la deuda de la Corporación Serrezuela Country Club.

4. La cónyuge supérstite, presentó recurso de apelación en audiencia y sustentado por escrito, a través del cual insistió que se disponga la introducción del pasivo de \$50.000.000, en consideración a que su adquisición quedó refrendada con los instrumentos cambiarios allegados y con la versión de la acreedora;

anotó que ese empréstito se destinó para los conceptos propios del hogar; precisó que deben reconocerse todas las recompensas, entre ellas, las que representan los intereses pedidos, máxime cuando su causación quedó patentizada con los elementos y declaraciones y enfatizó que *“no es entendible como la señora juez de la primera instancia, puede asegurar en su providencia que los pasivos allegados y las recompensas inventariadas obedecen a pasivos acomodadizos”*.

La prestamista Pilar Salamanca, también apeló con la finalidad de que se incluya su acreencia, pedimento que cimentó en que los títulos que la soportan cumplen con los requisitos genéricos y especiales del Código de Comercio; la Corporación Serrezuela Country Club, también promovió alzada y con posterioridad presentó un memorial advirtiendo que *“se desiste del recurso de apelación interpuesto y concedido dentro de la audiencia celebrada el 18 de abril de 2023 donde se resolvieron las objeciones de inventarios y avalúos”*.

5. Los herederos, radicaron escrito oponiéndose a la apelación presentada.

CONSIDERACIONES

De acuerdo con los lineamientos de la sentencia STC1768 de 2023 de la Sala de Casación Civil, las acreencias adquiridas en vigencia de la sociedad conyugal se presumen como sociales, salvo que los intervinientes exterioricen lo contrario mediante insumos probatorios capaces de certificar su oposición; sobre ese particular la Corte Suprema dijo que: *“...en tal sentido, cuando de pasivos se trata, el juzgador deberá atender inicialmente a su carácter social cuando fueren adquiridos en vigencia de la sociedad conyugal o patrimonial. La inclusión de dichas obligaciones se realizará siempre que se cumplan las formalidades allí previstas...”*

La objeción corresponderá a la parte que persiga su exclusión, la carga de «probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que de ellas persigue» (artículo 167 ejusdem), esto es que la obligación cuya sociabilidad se presume (artículo 1795 del Código Civil) generó un beneficio exclusivo total o parcial al cónyuge o compañero permanente y no a la sociedad, lo anterior, sin perjuicio de que debido a las particularidades del caso el juez de oficio o a petición de parte distribuya esa carga probatoria entre los involucrados (inciso 2, artículo 167 Código General del Proceso)”.

De cara a ese pronunciamiento, luce viable incluir el pasivo de la acreedora Pilar Salamanca, atendiendo a que la cónyuge lo denunció como una deuda obtenida en vigencia del matrimonio -

que sostuvo con el finado- y, además, porque aseguró que los recursos se invirtieron en la familia, específicamente para solventar el hogar, la educación de los hijos, el mantenimiento de muebles y vehículos, así como para adquirir alimentos.

En esas condiciones y siguiendo los derroteros de la Sala de Casación Civil, hay lugar a presumir que el pasivo se consiguió en el matrimonio y que fue destinado para su sustento, presunción que se refuerza porque al debate concurrió la prestamista, a saber, Pilar Salamanca, toda vez que manifestó que es la titular del crédito, que lo desembolsó a la cónyuge cuando las nupcias estaban vigentes y que para asegurar su pago creó 4 letras de cambio que ascienden a \$6.500.000, \$2.000.000, \$30.000.000 y \$11.500.000, (última que aportó).

Ahora bien, vista la empresa probatoria de los objetantes, se estima defectuosa para romper la presunción que deriva del precedente citado, son así las cosas porque los opositores no escoltaron sus afirmaciones con insumos poderosos que desmientan, por un lado, que la deuda no fue conseguida en la relación nupcial y, por el otro, que tales recursos no se destinaron para abastecer a la familia.

Es pacífico que la normatividad *prima facie* obliga a que los pasivos estén soportados en títulos ejecutivos, empero, las deudas

también pueden certificarse mediante otros elementos, dicho ello a propósito de indicar que, al margen de que las letras de cambio no tienen fecha de suscripción y exigibilidad, ello de suyo no obstaculiza su atención, menos cuando de lo expuesto por la acreedora, quien es la beneficiaria de esos documentos, puede colegirse que se firmaron en vigencia del matrimonio, asunto que también se tiene como cierto a partir de los extractos bancarios que ésta entregó y en virtud de la presunción del fallo STC1768 de 2023 que no fue enfrentada por los causahabientes.

En cuanto a que los instrumentos cambiarios se signaron sin carta de instrucciones, ello de suyo no los reduce, atendiendo a que esas instrucciones necesariamente no deben costar por escrito y en virtud de que su ausencia no frustra la exigibilidad de los títulos valores, menos cuando, de conformidad con la jurisprudencia, es deber de los oponentes demostrar que los títulos se llenaron por capricho, deber aquí incumplido.

Respecto de lo cual la Sala de Casación Civil en la sentencia de tutela de 30 de junio de 2009 conceptuó que *"...no podía, entonces, invertirse la carga de la prueba para dejar a hombros del acreedor el deber de acreditar cómo y por qué llenó los títulos, sino que aun en el evento de ausencia inicial de instrucciones, debían los deudores demostrar que tampoco las hubo con posterioridad o que, en todo caso, el acreedor sobrepasó las*

facultades que la ley le otorga para perfeccionar el instrumento crediticio en el que consta la deuda atribuida a los ejecutados”.

En esas condiciones y sumada la orfandad probatoria de los herederos, no hay mérito a considerar que las letras de cambio que soportan el recaudo del pasivo se diligenciaron con injusticia, debiéndose destacar que a partir de las manifestaciones de la cónyuge sobreviviente y la acreedora puede inferirse que esos legajos se crearon en vigencia de la sociedad conyugal.

Por manera que se agregará el pasivo por cuantía de \$50.000.000, justiprecio que viene soportado con las 3 letras de cambio que acopió la cónyuge sobreviviente estimadas en \$6.500.000, \$2.000.000 y \$30.000.000, como además en el instrumento cambiario que la acreedora aportó y que resulta en \$11.500.000, debiéndose advertir que los extractos bancarios y movimientos financieros suministrados por esta prestamista asimismo indican que el desembolso de esos capitales fue en vigencia del matrimonio, documentos obrantes en el archivo 36 del cuaderno principal.

De otra parte, se pasará al estudio de las recompensas que fueron discriminadas así: \$31.000.000 equivalentes a los intereses que la cónyuge sobreviviente pagó con ocasión del pasivo discurrido en precedencia, *“pago de póliza de los vehículos Mercedes*

\$2.800.000, pago de pólizas de los vehículos Kia \$5.313.983, pagos gastos Mercedes \$4.284.679, mantenimientos camioneta Kia, pagos cuotas de administración Club Serrezuela \$10.049.758, pago de empleada de servicio y gastos de servicio \$2.319.554 y pago tarjeta Davivienda \$1.827.927”.

Frente a los réditos, hay que decir que emanan del pasivo supra y de contera corresponden a la sociedad conyugal, cuya cuantía la cónyuge certificó con los recibos que entregó, cuya versión asimismo se ve soportada con la declaración de la prestamista e, incluso, con las probanzas que ésta anexó, de manera que es viable incluir esa partida porque fue un valor que cubrió la cónyuge para saldar obligaciones sociales.

En lo que respecta al *“pago de póliza de los vehículos Mercedes \$2.800.000, pago de pólizas de los vehículos Kia \$5.313.983, pagos gastos Mercedes \$4.284.679, mantenimientos camioneta Kia, pagos cuotas de administración Club Serrezuela \$10.049.758, pago de empleada de servicio y gastos de servicio \$2.319.554 y pago tarjeta Davivienda \$1.827.927”*, también se halla demostrada la generación y recaudo de estas nociones mediante los instrumentos recopilados.

De donde es factible conceptuar que esos capitales los cubrió la cónyuge sobreviviente y, además, que los destinó para

responder por servicios de la sociedad económica y abastecer el hogar, último que asimismo puede dictaminarse a partir de la presunción discurrida en precedencia, institución jurídica aplicable atendiendo a que los objetantes no demostraron lo contrario, quienes además tampoco certificaron que los activos o servicios beneficiados con esos pagos son de uso exclusivo de la ex pareja del difunto.

En respaldo de lo anterior, se insiste en lo dicho en la providencia STC1768 de 2023 de la Sala de Casación Civil, según lo cual en *"la objeción corresponderá a la parte que persiga su exclusión, la carga de «probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que de ellas persigue» (artículo 167 ejusdem), esto es la obligación cuya sociabilidad se presume (artículo 1795 del Código Civil) generó un beneficio exclusivo total o parcial al cónyuge o compañero permanente y no a la sociedad, lo anterior, sin perjuicio de que debido a las particularidades del caso el juez de oficio o a petición de parte distribuya esa carga probatoria entre los involucrados (inciso 2, artículo 167 Código General del Proceso)"*.

No es desconocido que algunas de las erogaciones fueron cubiertas luego de la muerte del de cujus, es decir, cuando la liquidación conyugal se encontraba disuelta, empero, tampoco es desapercibido que esas nociones provienen de obligaciones y activos

adquiridos en vigencia del matrimonio, de donde se sigue que esos conceptos están a cargo de forma solidaria frente a cada ex cónyuge, en consideración a que *“si ...con posterioridad a la disolución de la sociedad conyugal se hacen exigibles para la emergente comunidad universal que ha surgido, cuotas de una obligación con causa en un evidente título anterior a la disolución, apenas es lógico admitir que dichas cuotas o instalamentos constituyen obligación solidaria a cargo de los ex cónyuges o comuneros”*.

Razón por la cual se reconocerá el valor de las recompensas en un 50%, idéntico porcentaje que se empleará para cubrir las erogaciones pagadas en vigor de las nupcias, atendiendo a que la cónyuge en últimas cubrió obligaciones a cargo de la sociedad económica, de las cuales debe responder en proporciones iguales que el causante.

Por lo tanto, se modificará parcialmente la determinación censurada y no se analizará la alza de la Corporación Serrezuela Country Club, ya que esa entidad desistió de ese remedio jurídico.

DECISIÓN¹

¹ Para la resolución de la presente actuación se conformó el respectivo expediente de manera virtual, ello, siguiendo el protocolo dispuesto por el Consejo Superior de la Judicatura. Dicha actuación podrá ser consultada a través del link: https://etbcsj-my.sharepoint.com/:f/g/personal/jlondons_cendoj_ramajudicial_gov_co/EiMe2PUI4_xlrwGh7ZiFX74BAq9TLFyfOltik-2xOwSI5g?e=DK8owf

En mérito de lo expuesto, la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, **modificar parcialmente** el auto recurrido, en el sentido de incluir el 100% del pasivo analizado y de agregar las recompensas ponderadas, eso sí, en un 50%. Lo demás queda incólume.

Una vez cobre ejecutoria remítase a la oficina de origen, sin condena en costas por no aparecer causadas.

Notifíquese y cúmplase,

Firmado electrónicamente

JAIME LONDOÑO SALAZAR

Magistrado

Firmado Por:
Jaime Londono Salazar
Magistrado Tribunal O Consejo Seccional
Sala 003 Civil Familia
Tribunal Superior De Cundinamarca - Cundinamarca

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **967ecc945b840e5523f61af94c09015be857256c0d5bbc5f283d33b1b15bd648**

Documento generado en 19/05/2023 07:41:05 AM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>